

CONV 620/03

CONTRIB 277

NOTA DE TRANSMISIÓN

de: Secretaría

a: Convención

Asunto: Contribución de D. Alfonso Dastis y D. Gijs De Vries, miembros de la Convención:

- "Propuestas para garantizar mayor eficiencia y eficacia en los métodos de trabajo del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia"
-

El Secretario General de la Convención ha recibido la contribución adjunta de D. Alfonso Dastis y D. Gijs De Vries, miembros de la Convención.

Propuestas hispano holandesas sobre el Tribunal de Justicia

Propuestas para garantizar una mayor eficiencia y efectividad en los métodos de trabajo del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

A. Antecedentes

Es necesario examinar la posición del Tribunal de Justicia bajo la nueva Constitución. La ampliación de la UE aumentará sin lugar a dudas su carga de trabajo. Las posibles consecuencias de algunas de las propuestas presentadas a la Convención requieren reflexión sobre la posición del Tribunal, como antes han señalado algunos miembros de la Convención (incluyendo a los representantes de los Gobiernos de España y de los Países Bajos). Reconociendo la importancia de este asunto, el Presidium decidió constituir un grupo de discusión sobre el Tribunal de Justicia. Este documento sugiere algunas medidas concretas destinadas a garantizar que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia puedan realizar su trabajo de manera eficiente y efectiva.

B. Sugerencias concretas

1. Las modificaciones introducidas por el Tratado de Niza

El Tratado de Niza proporcionó una serie de medidas para que el Tribunal pudiese hacer frente al aumento de la carga de trabajo después de la ampliación. Estas mejoras deberían incorporarse al nuevo Tratado.

2. Acceso al Tribunal

La cuestión de si cada ciudadano particular podría acceder al Tribunal necesita estudiarse con mayor cuidado y profundidad. La posibilidad de modificar el actual borrador del apartado cuarto del artículo 230 debería realizarse paralelamente a la introducción de un sistema jerárquico entre las normas de la UE. En este contexto, consideramos que la protección judicial de los derechos humanos en el ámbito de la Unión se encuentra ya garantizada por el propio Tribunal de Justicia Europeo, así como por los tribunales nacionales y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No sería una buena idea hacer extensivo el acceso directo al Tribunal a los parlamentos nacionales para permitirles examinar las decisiones a la luz del criterio de la subsidiaridad, ni tampoco a las autoridades regionales ni locales. Esto sencillamente sembraría confusión en las diferentes posiciones ocupadas por los parlamentos nacionales y los gobiernos nacionales. Otra objeción es que podría politizar al Tribunal, lo cual en última instancia mermaría su credibilidad y su prestigio (“auctoritas”).

3. Jurisdicción del Tribunal

Tal como están las cosas, el Tribunal goza de jurisdicción únicamente sobre parte del ámbito de Justicia y Asuntos de Interior. Los Estados miembros no reconocen todos su jurisdicción en la misma medida o del mismo modo: en este aspecto existen importantes discrepancias. Los Países Bajos y España acogen con agrado una discusión sobre la ampliación de la jurisdicción del Tribunal en este campo. Es esencial tener presente que no debe permitirse que cualquier ampliación de su jurisdicción socave la resolución efectiva de procedimientos penales a nivel nacional o de asuntos relativos a extranjería.

4. Simplificación de la toma de decisiones sobre el Tribunal de Justicia

También podría mejorarse la toma de decisiones en el Consejo en relación con el Tribunal de Justicia, preferiblemente ampliando el ámbito de mayoría cualificada. En este contexto debería modificarse el artículo 225 A para permitir que las decisiones de establecer salas jurisdiccionales se tomen por mayoría cualificada. También se recomienda que se use con mayor frecuencia de lo previsto en el momento actual la posibilidad de crear salas jurisdiccionales en el seno del Tribunal de Primera Instancia. Las cuestiones altamente sensibles, tales como los regímenes lingüísticos, deben seguir estando sujetas a la regla de la unanimidad.

5. Resolución administrativa de los procedimientos de infracción

Los procedimientos de infracción tienen una fase administrativa seguida de una fase judicial en la que se determina la infracción. Esto significa que la Comisión a la larga tiene que someter toda infracción al Tribunal de Justicia. Se reduciría enormemente la carga de trabajo del Tribunal si los procedimientos de infracción terminasen con la decisión de la Comisión de que existe infracción. Entonces el Estado miembro tendría la opción de recurrir al Tribunal; este recurso tendría efecto suspensivo y estaría sujeto a plazos definidos. En vez de que la Comisión llame automáticamente la atención del Tribunal sobre las infracciones, la iniciativa pasaría a estar en el Estado miembro. En el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero existía un procedimiento similar. Este nuevo sistema exigiría garantías procesales mucho más claras que las existentes actualmente según el derecho de la CE.

6. Racionalización de los procedimientos de infracción en virtud del artículo 228 del TCE

Según el artículo 228 del TCE el Tribunal podría fijar, si así fuera requerido, un plazo razonable para que el Estado miembro que haya incurrido en incumplimiento empezara a tomar las medidas necesarias para cumplir una sentencia del Tribunal. Una vez expirado dicho plazo, podría preverse la posibilidad de que la Comisión tuviera que abrir *automáticamente* un procedimiento de infracción con plazos más claros.

7. Nombramiento de los jueces

Respetan plenamente el derecho soberano de los Estados miembros a presentar sus candidatos, los Países Bajos y España apoyan un proceso de selección de los jueces más efectivo con criterios más claros para los nombramientos y algún sistema que permita garantizar la idoneidad de los designados.

8. Preservación de la jurisprudencia del TJE

El actual proceso de reforma de la Unión Europea no puede ser un proceso de “*tábula rasa*”. Tenemos que construir nuestra reforma sobre lo que ya hemos conseguido dentro

de las Comunidades Europeas y de la actual Unión Europea. Un elemento esencial de este patrimonio es el “*acervo comunitario*” y entre los ingredientes de este último creemos que la jurisprudencia del Tribunal reviste particular importancia. Los Países Bajos y España consideran que la reforma en curso no debería socavar la validez de la jurisprudencia existente establecida por el Tribunal.

9. *Reconocimiento del juez nacional como juez de derecho comunitario (UE)*

Uno de los rasgos principales del sistema jurídico de la UE es que su respeto y ejecución está garantizado por los tribunales nacionales, que, por lo tanto, actúan como parte de “la estructura jurisdiccional de la UE”. Todo el procedimiento de las decisiones prejudiciales por parte del TJE o del TPI se basa en este entendimiento. Parece apropiado que un elemento tan importante de la UE como “comunidad de derecho” sea reconocido explícitamente en el futuro Tratado.

* * * * *